

Señores

JUZGADO SÉPTIMO (7°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

DEMANDANTE: ALEJANDRA CATALINA ARISTIZÁBAL Y OTRA.

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO.

RADICACIÓN: 760013103007-2024-00184-00

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando calidad de apoderado especial de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, con NIT 890.903.407-9, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con dirección electrónica de notificaciones notificacionesjudiciales@suramericana.com.co; como se acredita con el poder especial que se anexa a la presente. Encontrándome dentro del término legal para hacerlo, con el debido respeto me dirijo a Usted señor Juez, con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA** de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por ALEJANDRA CATALINA ARISTIZÁBAL Y OTRA en contra de mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO “1”. A mi representada no le consta de manera directa la ocurrencia del accidente de tránsito referido el día 5 de junio de 2024, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “2”. El presente hecho contiene distintas afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta de manera directa el fallecimiento del señor Jhon Dowglas

Aristizábal, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

- No es cierto que el fallecimiento que refiere la parte demandante haya podido ocurrir por imprudencia e impericia del conductor demandado, pues la parte accionante basa sus afirmaciones exclusivamente en el IPAT aportado al proceso el cual no tiene la virtualidad de endilgar responsabilidad civil ni determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente pues dicho informe no es diligenciado por un testigo presencial de los hechos.

FRENTE AL HECHO “3”. A mi representada no le consta de manera directa la edad del señor Jhon Dowglas Aristizábal, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “4”. A mi representada no le consta de manera directa el parentesco de la señora Alejandra Catalina Aristizábal con el señor Jhon Dowglas Aristizábal, sin embargo, el mismo puede evidenciarse en el registro civil de nacimiento que se aportó con la demanda.

FRENTE AL HECHO “5”: A mi representada no le consta de manera directa el parentesco de la señora Claudia Rocío Sanjuan con el señor Jhon Dowglas Aristizábal, y menos aun teniendo en cuenta que el registro de matrimonio aportado al proceso data del año 1999, por lo cual será necesario que la parte demandante pruebe la calidad de cónyuge respecto de la víctima para el momento de los hechos.

FRENTE AL HECHO “6”: A mi representada no le consta de manera directa si la víctima desarrollaba alguna actividad económica ni los ingresos que la misma le pudiese generar, sin embargo, de la revisión de las pruebas allegadas, se concluye que esta afirmación no es cierta pues no existe soporte alguno que dé cuenta que el señor Jhon Aristizábal era profesor de física para el momento de los hechos y que ganaba un salario mensual de \$3.813.087 pesos más prestaciones sociales.

FRENTE AL HECHO “7”. A mi representada no le consta de manera directa que el señor Jhon Dowglas Aristizábal se desplazaba por la vía mencionada el día de los hechos, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “8”. No es cierto que el demandado haya infringido la señal de tránsito causando el choque del vehículo en el cual se encontraba transportándose el señor Jhon Dowglas Aristizábal, pues la parte accionante basa sus afirmaciones exclusivamente en el IPAT aportado al proceso el cual no tiene la virtualidad de endilgar responsabilidad civil ni determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente pues dicho informe no es diligenciado por un

testigo presencial de los hechos.

FRENTE AL HECHO “9”. A mi procurada no le consta de manera alguna lo aquí afirmado por la demandante. Además, es necesario precisar que la foto relacionada en este hecho no tiene constancia de la fecha en la que fue tomada y por quién fue tomada desconociendo si se trata de una foto posterior a la ocurrencia del accidente, siendo imposible determinar que los daños ahí reflejados sean producto del choque referido. Adicionalmente, contrasta con lo afirmado por la parte demandante pues refiere daños del vehículo en su parte frontal derecha, pero en la fotografía referida se observan daños en la parte frontal izquierda.

FRENTE AL HECHO “10”. No es cierto que el demandado haya infringido la señal de tránsito y demás normas de tránsito referidas causando el choque del vehículo en el cual se encontraba transportándose el señor Jhon Dowglas Aristizábal, pues la parte accionante basa sus afirmaciones exclusivamente en el IPAT aportado al proceso el cual no tiene la virtualidad de endilgar responsabilidad civil ni determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente pues dicho informe no es diligenciado por un testigo presencial de los hechos.

FRENTE AL HECHO “11”. A mi representada no le consta de manera directa lo relacionado con el lugar del choque de los vehículos, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “12”. A mi representada no le consta de manera directa lo relacionado con la posición final del vehículo de placas LYU-881, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “13”. A mi representada no le consta que la víctima haya fallecido minutos después del accidente, motivo por el cual la parte demandante deberá probar lo aquí afirmado conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

FRENTE AL HECHO “14”. A mi representada no le consta lo aquí afirmado sobre la propiedad del vehículo asegurado al momento del accidente, sin embargo, así se puede corroborar del certificado de tradición aportado con la demanda.

FRENTE AL HECHO “15”. Es parcialmente cierto, pues si bien el vehículo del demandado se encontraba asegurado por Seguros Generales Suramericana S.A., ello no implica que automáticamente exista responsabilidad alguna en cabeza de mi representada pues el seguro solo podrá afectarse en la medida que se compruebe la ocurrencia del riesgo asegurado y demás supuestos contenidos en dicho contrato.

FRENTE AL HECHO “16”. Este hecho contiene diferentes afirmaciones frente a las cuales me

pronunciaré de la siguiente forma:

- No es cierto que por parte del demandado haya existido imprudencia e impericia en el manejo del vehículo de placas LYU-881, por lo tanto, no es cierto que se le pueda endilgar una conducta causante de angustia y sufrimiento a las demandantes.
- A mi representada no le consta la existencia de dicha angustia y sufrimiento al tratarse de un aspecto íntimo de la vida de las demandantes por lo que deberá probarse.

FRENTE AL HECHO “17”. Este hecho contiene diferentes afirmaciones frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- No es cierto que por parte del demandado haya existido imprudencia e impericia en el manejo del vehículo de placas LYU-881, por lo tanto, no es cierto que se le pueda endilgar una conducta causante de alteraciones en el tipo de vida que tenían las demandantes.
- A mi representada no le consta la alteración de la vida de las demandantes al tratarse de un aspecto íntimo de ellas por lo que deberá probarse.

FRENTE AL HECHO “18”. No es cierto, pues solo puede hablarse de reparación al existir un daño que deba ser reparado por la parte demandada como consecuencia de haber desplegado una conducta generadora del mismo, situación que no se configura en el presente caso.

FRENTE AL HECHO “19”. A mi representada no le consta los supuestos padecimientos sufridos por el señor Jhon Dowglas Aristizábal desde la ocurrencia del accidente hasta el momento de su fallecimiento, por lo que la parte demandante deberá probar lo aquí manifestado.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.1.” ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues no concurren los presupuestos exigidos por la Ley para la declaratoria de la responsabilidad civil que se pretende, ello en virtud de que en el caso objeto de estudio se evidencia una carencia total de material probatorio que permita verificar la configuración de los presupuestos de la responsabilidad perseguida, aclarando que las pretensiones se soportan exclusivamente en el IPAT el cual no resulta ser una prueba idónea para la comprobación de las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.

Ahora bien, entre SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y el asegurado solo existía para el momento de los hechos un vínculo contractual, sin embargo, incurriendo en un error técnico

jurídico el apoderado de la parte demandante pretende se declare la responsabilidad de mi representada de forma solidaria evadiendo el hecho de que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. no tuvo injerencia o participación alguna en relación al accidente de tránsito fechada al 5 de junio de 2024 habida cuenta que no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo conducían, de tal forma que a mi procurada es manifiestamente inaplicable la solidaridad legal establecida en el artículo 2344 del Código Civil para los eventos de responsabilidad civil aquiliana o extracontractual en el que dos o más personas concurren a la realización del hecho dañoso. Es importante señalar que la solidaridad tiene su fuente en la ley o la convención, y en el caso que nos ocupa no existe norma que establezca una solidaridad legal de las aseguradoras en relación con los riesgos que asumen, ni un pacto expreso sobre el particular en el contrato de seguro. En efecto, se resalta que las obligaciones contraídas por mi procurada se encuentran delimitadas por las condiciones particulares y generales de la póliza pactada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.2”: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues no concurren los presupuestos exigidos por la Ley para la declaratoria de la responsabilidad civil que se pretende, ello en virtud de que en el caso objeto de estudio se evidencia una carencia total de material probatorio que permita verificar la configuración de los presupuestos de la responsabilidad perseguida, aclarando que las pretensiones se soportan exclusivamente en el IPAT el cual no resulta ser una prueba idónea para la comprobación de las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito. Por lo tanto, no se ha demostrado la ocurrencia del riesgo asegurado ni la cuantía de la pérdida haciendo improcedente el surgimiento de la obligación a cargo de mi representada en los términos del artículo 1077 del C.Co.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.3.”: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues es claro que para que nazca a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora cuando la parte demandante no ha demostrado fehacientemente la ocurrencia del siniestro y tampoco la cuantía de la pérdida.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.1”: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión de lucro cesante pues a Rocío Ávila Sanjuan no se le puede reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, pues frente al lucro cesante debe advertirse que: **(i)** En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del señor Jhon Dowglas Aristizábal, y; **(ii)** Esto quiere decir que el señor Jhon Dowglas Aristizábal no trabajaba, ni generaba ingresos para el momento del accidente de tránsito, por lo tanto, los hechos del 5 de junio de 2024

no afectaron en nada las condiciones económicas que la reclamante tenía antes de dicho suceso pues no existe elemento probatorio que permita conocer con certeza que la víctima generaba un ingreso continuo con el cual brindara apoyo económico a la demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.3” ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión de perjuicio moral pues resulta a todas luces improcedentes por cuanto las demandantes solicitan el valor de 100 SMLMV tanto para la señora Alejandra Catalina Aristizábal, como para la señora Claudia Rocío Ávila, cuando el límite máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia es de \$60.000.000, monto ostensiblemente menor. Debe recordarse que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad de los demandados y como quiera que en este caso no existe tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la tasación propuesta por las demandantes es totalmente ajena a la postura manejada por el máximo órgano de cierre de jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, por lo tanto, resulta inviable conceder esta pretensión en tanto no se ha corroborado la responsabilidad en cabeza del demandado y, en todo caso, el valor solicitado resulta excesivo y se propone en claro desconocimiento de los lineamientos existentes en la jurisprudencia vigente.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.4” ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión de daño a la vida de relación pues no se ha cumplido la carga demostrativa de su causación, de esta forma, dentro del plenario no obra ningún medio de prueba que permita entrever alteraciones, cambios o mutaciones en el comportamiento de las demandantes en relación con los demás, así como cambios en sus condiciones de existencia. Adicionalmente, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, debe recordarse que la jurisprudencia de la Cortes Suprema de Justicia ha reconocido dicho perjuicio frente a la víctima directa, no obstante, en el presente caso lo reclaman accionantes que no ostentan dicha calidad desconociéndose dicho presupuesto jurisprudencial.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.5.” ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión de daño a la salud pues la parte demandante pretende le sea indemnizado un concepto que la jurisprudencia en materia civil no ha reconocido, tornando claramente en improcedente su pedimento. De esta forma, el daño a la salud es una tipología del daño que actualmente no es reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Así pues, el reconocimiento de un daño adicional a los reconocidos por la Corte en su jurisprudencia constituiría a todas luces un enriquecimiento injusto a favor de la parte demandante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.5.” ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues es una pretensión consecuente de las anteriores, aclarando además que reitera la solicitud de intereses no solo desde la sentencia sino desde la demostración de la cuantía y el siniestro, por lo cual es una pretensión similar a la de la solicitud de intereses moratorios en contra de la

aseguradora, remitiéndome para tal efecto al pronunciamiento que realicé frente a dicha pretensión.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6”. ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión pues es una pretensión consecuente de las anteriores.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.7”. Esta pretensión contiene dos solicitudes frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

- **ME OPONGO** a que se actualicen las sumas pretendidas al momento de dictar sentencia pues los pedimentos de la parte demandante se realizan con base en SMLMV, haciendo que la cuantía solicitada sea determinable mediante la utilización de este concepto, mas no se trata de una suma determinada o líquida de dinero que pierda valor adquisitivo y requiera de indexación.
- **ME OPONGO** a la indexación de los valores asegurados en las pólizas toda vez que dicha pretensión desconoce lo preceptuado en el artículo 1056 del C.Co, con fundamento en e cual mi representada decidió determinar el valor asegurado mediante una suma fija de dinero, por lo cual no puede buscarse dicha indexación desconociendo la voluntad de las partes reflejada en el contrato de seguro.
- **ME OPONGO** a la acumulación de intereses de mora (pretensión “5.5”) e indexación (pretensión “5.7”). Lo anterior, en la medida en que se estaría condenando a la parte demandada a un doble pago por la misma causa, ya que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la corrección de la devaluación de la moneda.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Objeto el juramento estimatorio presentado por el Demandante de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso toda vez que la cuantificación aquí realizada se basa en valores sin soporte de ninguna clase como se referirá a continuación.

En este sentido frente al lucro cesante reclamado por la parte demandante debe advertirse que: **(i)** en el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del señor Jhon Dowglas Aristizábal, y; **(ii)** esto quiere decir que el señor Jhon Dowglas Aristizábal no trabajaba, ni generaba ingresos para el momento del accidente de tránsito. Por lo tanto, los hechos del 5 de junio de 2024 no afectaron en nada las condiciones económicas que la reclamante tenía antes de dicho suceso pues no existe elemento probatorio que permita conocer con certeza que la víctima generaba un ingreso continuo con el cual brindara apoyo económico a la demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, carece de todo razonamiento la liquidación presentada en este acápite pues para la misma se toma como base salarial el valor del \$3.813.087, pese a que no existe soporte de ninguna clase que permita deducir que la víctima contaba con dicho ingreso para el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito. En este sentido, resulta igualmente improcedente que en el cálculo matemático se incremente el 25% de factor prestacional calculado sobre la base ya referida anteriormente cuando ni siquiera existe sustento de dicho ingreso, por lo cual el mencionado incremento sobre el valor de \$3.813.087 resulta totalmente arbitrario.

Adicionalmente a lo mencionado, al no existir respaldo del valor líquido utilizado como factor salarial, tampoco puede deducirse el valor que se destinaba como ayuda económica a la señora Claudia Rocío Ávila Sanjuan y, lo que es más, ni siquiera se allega prueba al proceso de que la mencionada demandante recibiera valor alguno de dinero por parte de la víctima.

Con fundamento en lo anterior, objeto la tasación excesiva e infundada que realiza la parte demandante y solicitamos al Despacho que desestime cada estimación de los perjuicios que en el juramento se incluyen.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD – NO ACREDITACIÓN DE LA PRUEBA DE NEXO CAUSAL

La parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 2024 hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo de placa LYU-881, pues la activa basa sus infundadas pretensiones de forma única y exclusiva en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, el cual carece de virtualidad para endilgar una responsabilidad como la pretendida por los demandantes siendo claro que se ha incumplido la carga probatoria establecida en el artículo 167 del CGP trayendo como consecuencia el fracaso de las pretensiones de la demanda.

Uno de los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual, es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso. Este elemento debe demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. Es así como la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose

un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. De esa manera, el reclamante en acción extracontractual deberá enfilarse su causa y labor demostrativa a **“aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad extracontractual, como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad”** (CSJ SC del 9 de feb. de 1976). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio no debe conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, correspondiendo a la parte demandante acreditar la culpa y el nexo causal en las acciones desarrolladas por su contraparte. A su vez, existe consenso en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, la Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por Responsabilidad Civil Extracontractual, saber *“a) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”*¹.

Ahora bien, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 5 de junio de 2024, el cual carece del valor probatorio que pretende otorgarle, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad. Igualmente, es importante reseñar que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

Artículo 149: El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC13925-2016. Radicado: 050013103003-2005-00174-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...]

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original).

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. *Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, **que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis,** pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la

realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y, por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

En contraste con lo expuesto, en el caso que nos ocupa, se tiene que la parte actora pretende que se declare la existencia de responsabilidad civil en cabeza de la parte pasiva de la acción, debido a los supuestos perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 2024 de conformidad con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, cuando tal carece de la virtualidad de acreditar y sustentar las aspiraciones de la activa en este trámite. Así pues, es claro cómo al interior del proceso no se ha acreditado el nexo de causalidad, toda vez que no obra al interior del plenario elementos probatorios que realmente logren acreditar la existencia responsabilidad por parte del vehículo de placa LYU-881.

Adicionalmente, el artículo 167 del Código General del Proceso, determinó que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Por tanto, es claro cómo el incumplimiento de tal carga procesal consecuentemente deviene en el fracaso de sus pretensiones, y no es de recibo que el extremo actor pretenda la prosperidad de sus pretensiones con asiento en su exclusivo dicho. En consecuencia, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de la prueba. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recaerá en cabeza del asegurado.

En conclusión, es claro como al interior del presente trámite no existe prueba alguna de que los perjuicios presuntamente padecidos por los demandantes hayan devenido en forma alguna del proceso de conducción del vehículo de placa LYU-881, como quiera que el Informe Policial de Accidente Tránsito, único elemento a partir del cual la activa pretende se endilgue responsabilidad a los demandados, es un documento carece de la capacidad y/o virtualidad a fin de acreditar la responsabilidad en la comisión de un accidente de tránsito. Por tanto, al ser clara la ausencia de acreditación de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual que se pretende endilgar a la pasiva consecuentemente las pretensiones de la demanda se encuentran abocadas a su fracaso.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

2. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR CONCURRENCIA DE CULPAS

Esta excepción se propone sin perjuicio de las anteriores y subsidiariamente, toda vez que de conformidad con las circunstancias fácticas respecto a las cuales supuestamente ocurrió el accidente de tránsito presuntamente acaecido el 5 de junio de 2024, pretende la parte demandante

desconocer que, tanto el señor José David Puentes como el señor Jhon Dowglas Aristizábal ostentaban la calidad de conductores. Encontrándose ambos en el deber de estar atentos de la vía y las actuaciones de los demás actores a fin de evitar la materialización de hechos como el que nos convoca a este trámite. Es decir, en el hipotético caso en que se declare la existencia de responsabilidad, la eventual indemnización deberá disminuirse en proporción a la participación de la víctima en el suceso, esto es, como mínimo en un 50%, ya que se encontraba desplegando una actividad peligrosa respecto de la cual le es exigible actuar de forma especialmente cuidadosa.

A partir de la Jurisprudencia de las altas Cortes, para el análisis de este tipo de eventos en los que puede llegar a existir concurrencia de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, corresponderá al Juez examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el supuesto daño. Lo anterior, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del daño. Estableciendo de ese modo, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

*“ARTÍCULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Ahora bien, cuando el daño es consecuencia de la convergencia de roles riesgosos realizados por la víctima y el agente, el análisis de la contribución de cada uno de los involucrados en la producción del hecho no debe ser desmesurado ni subjetivo, pues es fundamental establecer la circunstancia incidental que corresponde en este caso. Ha retomado entonces la Corte Suprema de Justicia² la tesis de la intervención causal, consistente en que la graduación de culpas cuando se está en presencia de actividades peligrosas concurrentes, imponiendo al juzgador el deber de examinar a plenitud las conductas desplegadas por las partes involucradas, para precisar la incidencia en el daño y consecuentemente, determinar la responsabilidad de uno y otro:

“Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro

² Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de junio de 2018, Radicado: 11001-31-03-032-2011-00736-01.

(...)³ (*Enfasis de autoría*)

Así entonces, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de alguno de los sujetos, habría un único responsable. Sin embargo, distinto es, cuando concurren ambas actividades peligrosas, emanadas en este caso de la conducción de vehículos, como causa del daño, determinando la contribución de los involucrados, que implica atenuar el deber de repararlo.

Consecuentemente en el hipotético, remoto y eventual escenario en que esta Judicatura encuentre acreditada la responsabilidad de la pasiva de la acción, deberá seguidamente reducirse el eventual valor indemnizatorio en atención al porcentaje de participación que el señor Jhon Dowglas Aristizábal, en calidad de conductor del vehículo de placa GJN-24F tuvo en la producción del hecho lesivo del cual pretenden las demandantes obtener indemnización, ello viéndose reflejado en que a la víctima le es exigible el cabal cumplimiento de las normas de tránsito y el desarrollo de la actividad peligrosa atendiendo a una conducta de suma prudencia para evitar la ocurrencia de accidentes como el que fundamenta la demanda. Luego, la reducción de la indemnización en caso de una eventual condena deberá ser al menos del 50% en atención al desarrollo simultáneo de actividades peligrosas.

Solicito se declare probada esta excepción.

3. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DEL PERJUICIO DENOMINADO DAÑO MORAL

Sea lo primero indicar que los perjuicios extrapatrimoniales por concepto de daño moral que pretenden las demandantes resultan a todas luces improcedentes por cuanto solicitan el valor de 100 SMLMV tanto para la señora Alejandra Catalina Aristizábal, como para la señora Claudia Rocío Ávila, cuando el límite máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia es de \$60.000.000, monto ostensiblemente menor. Debe recordarse que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad de los demandados y como quiera que en este caso no existe tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la tasación propuesta por las demandantes es totalmente ajena a la postura manejada por el máximo órgano de cierre de jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, por lo tanto, resulta inviable conceder esta pretensión en tanto no se ha corroborado la responsabilidad en cabeza del demandado y, en todo caso, el valor solicitado resulta excesivo y se propone en claro desconocimiento de los lineamientos existentes en la jurisprudencia vigente.

³ Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 24 de agosto de 2009, Radicado: 2001-01054-01; igualmente reiterado en sentencias del 26 de agosto de 2010, Radicado: 2005-00611-01, y del 16 de diciembre de 2010, Radicado: 1989-000042-01.

La Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan equivocados y exorbitantes. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala de Casación Civil, para la tasación de los pretendidos perjuicios se ha fijado en tope indemnizatorio de \$60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

“Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija en la suma de sesenta millones de pesos (\$60.000.000) el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima”⁴ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia⁵, se ha establecido un rango entre \$50.000.000 y \$60.000.000 como tope máximo para resarcir los perjuicios morales sufridos como consecuencia de la muerte de un ser querido. Además, este tope solo se aplica a los familiares en primer grado de consanguinidad y civil. De lo anterior, también cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha establecido sus baremos en la unidad de Salarios Mínimos Legales Mensuales vigente si no que lo ha hecho en cantidades ciertas que solo varían si la Corte lo considera necesario en pronunciamientos futuros. Así pues, no es procedente que los demandantes pidan una compensación tasada mediante SMLMV, cuando la jurisprudencia expresamente ha tasado en valores reales y no sujeto a indexación el valor que se otorga si su pretensión de resarcimiento de perjuicios prospera. En ese orden de ideas, el valor pretendido por los demandantes resulta a todas luces desproporcionado y exorbitante, toda vez que: (i) La señora Alejandra Catalina Aristizábal, hija de la víctima fallecida, solicita el valor equivalente a 100 SMLMV a saber, la suma de \$130.000.000, y; (ii) la señora Claudia Rocío Ávila San Juan, cónyuge de la víctima fallecida, solicita el valor equivalente a 100 SMLMV a saber, la suma de \$130.000.000. Así pues, las sumas solicitadas por el extremo actor son ostensiblemente mayores a la reconocida por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria pues, la cónyuge y la hija de la víctima podrían solicitar un valor máximo de \$60.000.000

En conclusión, desde cualquier punto de vista se evidencia que la tasación del daño moral solicitado por el demandante es exorbitante por varios motivos: (i) Supera los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia a saber, \$60.000.000, y; (ii) La tasación se hizo en salarios mínimos sin

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicado Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01. Marzo 7 de 2019.

⁵ Óp. Cit. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia. Expediente 11001-31-03-028- 2003-00833-01.

traducirla a una cifra cierta. De esa manera, desborda todo límite y criterio jurisprudencialmente establecido. En consecuencia, deberá desestimarse la exorbitante tasación de perjuicios propuesta por el extremo actor.

Por lo anterior, respetuosamente ruego al Honorable Juez tener por probada esta excepción.

4. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ASÍ COMO SU CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA

La presente excepción se propone teniendo en cuenta que la parte demandante pretende el reconocimiento del perjuicio denominado daño a la vida de relación sin que para tal fin haya cumplido la carga demostrativa de su causación, de esta forma, dentro del plenario no obra ningún medio de prueba que permita entrever alteraciones, cambios o mutaciones en el comportamiento de las demandantes en relación con los demás, así como cambios en sus condiciones de existencia. Adicionalmente, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas, supuesto que no se cumple en el presente caso ya que la víctima falleció. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

“Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.

Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma

cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (...)"⁶.

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con **la pérdida de la capacidad de locomoción permanente**, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera⁷. Nótese que en dicho caso la víctima perdió su movilidad de forma definitiva, mientras que el presente caso, quienes reclaman este perjuicio no son víctimas directas cuya locomoción se haya alterado producto del accidente. En otro penoso caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de \$ 30.000.000 **a la víctima directa por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**.

Obsérvese que, en los casos antes referidos, el reconocimiento del perjuicio se realiza frente a la víctima que quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En contraste con lo anterior, el caso particular que nos cita al presente proceso, no cuenta con un medio de prueba que, al menos sumariamente, permita acreditar que las demandantes tuvieron consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron directamente su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo, esto es así por cuanto reclaman el daño a la vida de relación por las consecuencias que supuestamente trajo el accidente de tránsito sobre la humanidad del señor Jhon Dowglas Aristizábal, y no sobre secuelas de carácter fisiológico

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006-1997-09327-01.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03-002-2009-00114-01.

que las accionantes hubieren sufrido a raíz del accidente objeto de análisis lo que torna improcedente la reclamación del perjuicio al no ajustarse a los presupuestos jurisprudenciales.

Es indispensable reiterar que el caso particular trata del fallecimiento del señor Jhon Dowglas Aristizábal y no de las lesiones que las accionantes hubieren podido sufrir a raíz del accidente de tránsito, por lo tanto, se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que se avizore en las demandantes, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso.

Ahora bien, como ya se había señalado, la petición no solo es improcedente, sino que resulta exorbitante toda vez que pretende el pago o indemnización por este tipo de perjuicio por un valor de 100 SMLMV para cada una de las demandantes, valor que sobrepasa con creces los montos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en sus pronunciamientos, tal como se pudo evidenciar en el análisis de los casos que anteriormente se refirieron. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta anteriormente.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio en favor de las demandantes es improcedente, pues no se encuentra plenamente acreditado dentro del presente proceso y no son ellas las llamadas a ser indemnizadas por dicho concepto en caso de una eventual condena. Lo anterior, por cuanto el mismo sólo se concede en casos especialísimos a la víctima directa en los cuales se impacte directamente el estilo de vida de la persona. Sin embargo, el caso particular refiere a que la supuesta víctima del accidente de tránsito es el señor Jhon Dowglas Aristizábal quien, de no haber fallecido, sería el único legitimado en pretender este tipo de reclamación, más no su cónyuge y su hija quienes no son víctimas directas del accidente de tránsito. Además, como se expuso, es exagerado el monto pretendido con relación al presunto daño sufrido, lo demostrado en el proceso y el baremo jurisprudencial que al respecto ha emitido reiteradamente el órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria especialidad civil.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA SALUD RECLAMADO POR LAS DEMANDANTES

Se propone la presente excepción teniendo en cuenta que la parte demandante pretende le sea indemnizado un concepto que la jurisprudencia en materia civil no ha reconocido, tornando claramente en improcedente su pedimento. De esta forma, el daño a la salud es una tipología del daño que actualmente no es reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, pues los

daños inmateriales se dan en tres aspectos de forma restrictiva, tal como se refiere la Corte Suprema de Justicia:

“De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional”⁸.

Así pues, el reconocimiento de un daño adicional a los reconocidos por la Corte, constituiría a todas luces un enriquecimiento injusto a favor de la parte demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que en el evento en el que se considere que los perjuicios solicitados corresponden al daño a la vida en relación, de cualquier manera, deberá tenerse en cuenta que los mismos no han sido acreditados y que la tasación propuesta por la parte demandante es absolutamente exorbitante en tanto supera los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia los cuales fueron referidos en la excepción dirigida a atacar el perjuicio denominado daño a la vida de relación. En efecto, como se evidencia en el acápite de pretensiones, la parte demandante busca le sea indemnizado un concepto que ni siquiera es reconocido por la jurisprudencia existente en materia civil y por un monto equivalente a 100 SMLMV para cada una de las accionantes, petición que a todas luces resulta desbordada y desconocedora de nuestro ordenamiento jurídico pues, incluso si se llegare a subsumir la petición del reconocimiento del daño a la salud en el daño a la vida de relación y se optare por conceder dicha pretensión, debe observarse que la Corte Suprema de Justicia no ha dado vía libre para que frente a dicho perjuicio se reconozca un suma equivalente a 100 SMLMV como lo pretende la parte actora.

En efecto, es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación del perjuicio, en tanto el mismo resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños a la vida de relación que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia ya relacionada.

En conclusión, como primera medida se advierte que el daño en la salud no es una tipología del daño actualmente reconocida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por ende, no hay lugar al reconocimiento de esta pretensión. En segundo lugar, si el honorable Juzgado entendiera la petición del demandante como un daño a la vida en relación, de todas formas, es de advertir que este daño no se encuentra demostrado, y que la tasación presentada por los

⁸ Corte Suprema de Justicia, SC10297-2014. Radicación: 11001-31-03-003-2003-00660-01.

demandantes es excesiva y deberá atenerse fielmente a los baremos establecidos por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

En virtud de todo lo anterior, de manera respetuosa solicito que se declare probada esta excepción.

6. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que a la Rocío Ávila Sanjuan no se le puede reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, pues frente al lucro cesante debe advertirse que: **(i)** En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del señor Jhon Dowglas Aristizábal, y; **(ii)** Esto quiere decir que el señor Jhon Dowglas Aristizábal no trabajaba, ni genera ingresos para el momento del accidente de tránsito, por lo tanto, los hechos del 5 de junio de 2024 no afectaron en nada las condiciones económicas que la reclamante tenía antes de dicho suceso pues no existe elemento probatorio que permita conocer con certeza que la víctima generaba un ingreso continuo con el cual brindara apoyo económico a la demandante.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(…) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.** (…) Vale decir que el **lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinsa en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (…) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que*

conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables⁹. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente

*“Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, **a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable**, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov.”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

*«(...) **resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido**».¹⁰ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Descendiendo al caso en concreto, se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan los valores de \$140.282.329 por concepto de lucro cesante consolidado y \$573.015.867 por concepto de lucro cesante futuro, sin embargo, la parte interesada no ha cumplido con la carga demostrativa que le asiste con el fin de verificar los presupuestos mencionados en la

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

jurisprudencia y evaluar la procedencia del reconocimiento de este perjuicio.

En efecto, la parte demandante se limita a afirmar que el señor Jhon Dowglas Aristizábal trabajaba en el área de la docencia para el momento en el cual ocurrió el accidente de tránsito devengando un salario de \$3.813.087, sin embargo, como se observa en los anexos de la demanda, no existe ningún documento tendiente a acreditar los ingresos o actividad lucrativa de la víctima sustentando su existencia en la simple afirmación realizada por las reclamantes en la demanda, por lo tanto, se configura una completa ausencia probatoria al respecto, la cual no puede ser suplida o presumida por el fallador al momento de tomar una decisión, situación que, además, pone de presente que al no existir dichos ingresos, la cónyuge sobreviviente no pudo haber recibido una renta continua por parte de la víctima hasta el momento del accidente, luego, carece de cualquier sustento su pretensión.

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada y bajo supuestos facticos inexistentes como la presunta existencia de una actividad económica que generaba ingresos continuos para la víctima de los cuales se destinaba un porcentaje a la parte demandante. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

En conclusión, es claro que el demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la Ley consagra en estos casos. Lo que no sucede en el presente toda vez que se solicita un lucro cesante bajo una completa carencia de medios de prueba.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO PLAN AUTOS GLOBAL
NO. 900001035640

7. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

En el caso concreto no hay prueba de la realización del riesgo asegurado por cuanto no se acreditó la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, toda vez que el demandante no allega ninguna prueba que acredite que fue con ocasión a una imprudencia o impericia del señor David Puentes, conductor del vehículo de placa LYU-881, que se produjo el accidente. Ello, por cuanto la única prueba allegada al plenario para el efecto es el IPAT, el cual no es una prueba útil, conducente ni pertinente para acreditar la responsabilidad. Por otro lado, el demandante no acredita la cuantía de la pérdida en la medida en que no allega con la demanda prueba alguna que dé cuenta de la causación de los perjuicios que reclama.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. En el presente caso, no se demostró la realización del riesgo asegurado, debido a que no hay nexo causal entre la conducta desplegada por el señor David Puentes y la lamentable muerte del señor Jhon Aristizábal. Adicionalmente, debido a que no se acreditó la cuantía de la pérdida, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de la Compañía de Seguros.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante, quien en la relación contractual tiene la calidad de beneficiaria. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace

la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible”

“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida. (…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)¹¹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro, consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

¹¹ Álvarez Gómez, Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (...), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.)¹².”

La Corte Suprema de Justicia ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios¹³”
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y, de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

¹² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2482-2019. Radicación n.º 11001-31-03-008-2001-00877- 01. Julio 9 de 2019.

¹³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente 1100131030241998417501. Noviembre 11 de 2004.

1.1. La no realización del Riesgo Asegurado

Sin perjuicio de las excepciones propuestas frente a la responsabilidad del asegurado, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. 900001035640, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la Aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al Asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este deba resarcir los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de los daños generados con el vehículo asegurado. Sin embargo, en este caso encontramos que en el plenario no se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, la parte demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro, de la siguiente manera:

SECCIÓN 1 – COBERTURAS PRINCIPALES

1. DAÑOS A TERCEROS

1.1 COBERTURA

SURA pagará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sean consecuencia de daños que le causes a otra persona o a sus bienes, derivados de un accidente con:

a) El carro asegurado cuando tú lo estabas manejando.

b) El carro asegurado cuando lo estaba manejando una persona a la que se lo prestaste.

c) El carro asegurado cuando se haya desplazado solo o se causen daños al carro sin movimiento.

d) Un carro diferente del carro asegurado si tú, tu esposo, tu esposa o tus hijos dependientes económicamente hasta los 25 años, lo estaban manejando debidamente autorizados.

Esta cobertura está condicionada a que tú o la persona que conduce el carro sea civilmente responsable frente a la persona a la cual se le causaron los daños y que esta responsabilidad no se derive de un contrato:

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que: (i) no se prueba que el hecho generador del daño esté en cabeza del señor David Puentes, conductor del vehículo asegurado, (ii) no existe nexo causal entre la conducción del vehículo de placas LYU-881 y el lamentable fallecimiento del señor Jhon Dowglas Aristizábal y, (iii) el IPAT no es prueba idónea que tenga la virtualidad de establecer la responsabilidad del accidente respecto de los conductores involucrados. Como consecuencia de ello, no ha nacido la obligación condicional por parte de la aseguradora.

1.2. Acreditación de la cuantía de la pérdida

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que: i) la parte demandante solicita el reconocimiento del lucro cesante, no obstante, no justifica la suma solicitada mediante prueba o elemento de juicio suficiente ya que, no se acredita que la víctima haya contado con un trabajo y, en ese sentido, con una remuneración periódica la cual utilizaba para destinar un porcentaje a la parte accionante; ii) No se encuentran acreditados los perjuicios extrapatrimoniales derivados del daño moral y del daño a la vida de relación, señalando además que la tasación de este tipo de perjuicios resulta excesiva y adicionalmente, el resarcimiento del daño a la vida de relación es un perjuicio que de encontrarse acreditado solo es susceptible de reconocerse a la víctima directa, presupuesto que no se cumple en este caso, y; iii) El supuesto daño a la salud reclamado por la parte demandante no solo no se encuentra acreditado, sino que además corresponde a una tipología de perjuicio no reconocida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. De tal forma que, al no existir prueba si quiera sumaria que permita acreditar tales emolumentos los mismos no pueden ser reconocidos con cargo a la Póliza de Seguro.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida, que la parte actora no

demonstró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida, no se encuentra probada, como quiera que el lucro cesante es improcedente, teniendo en cuenta que no existe prueba que acredite la tipología de daño deprecada en la demanda con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 2024, así como tampoco existe prueba de la causación de los perjuicios extrapatrimoniales. En ese entendido, debido al incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código del Comercio por la parte demandante, ello por cuanto se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

8. SUJECIÓN A LOS RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA PLAN AUTOS GLOBAL NO. 900001035640

Debe señalarse que el juez deberá analizar la póliza vinculada y deberá determinar si se configura alguna de las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, caso en el cual el Despacho deberá abstenerse de afectar la misma incluso en el remoto evento en que se demuestre la responsabilidad en cabeza del asegurado. En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“En efecto, no en vano los artículos 1056 y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad. Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.¹⁴

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4527-2020. Magistrado Ponente: Francisco Ternera Barrios.

“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros. Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego, en este último negocio asegurativo, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes”¹⁵ (Subrayado y negrilla fuera del texto del texto original).

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro, no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado preestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador.”

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”¹⁶ (Subrayado y negrilla fuera del texto del texto original)

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. De forma que, en el caso de la ocurrencia de riesgos excluidos, no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria del asegurador y en ese orden de ideas, no hay lugar a que su

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo.

¹⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 diciembre 13 2018.

responsabilidad se vea comprometida. Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en la Póliza de Seguro Plan Autos Global No. 900001035640, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, que en caso de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse mi prohijada.

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester señalar que, si durante el proceso se logra establecer la ocurrencia de alguna de las exclusiones contenida en el condicionado general, la póliza no podrá ser afectada. En tanto la situación se encontraría inmersa en una exclusión. Así las cosas, de configurarse alguna de ellas no podrá existir responsabilidad en cabeza de Seguros Generales Suramericana S.A. por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza, pues las partes acordaron pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza de Seguros Generales Suramericana S.A. Por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

9. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EN LA QUE SE IDENTIFICA LA PÓLIZA NO. 900001035640, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio, Seguros Generales Suramericana S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del asegurado cuando son personas distintas. Por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de las demandantes contra mi representada, Seguros Generales Suramericana S.A., tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza se Seguro Plan Autos Global No. 900001035640, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares y con las condiciones generales contenidas en la forma No. 21/06/2023-1318-P-03-F-13-18-0040-245-D001 aplicable a la póliza.

10. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es menester señalar que en el hipotético y remoto caso en que se ordene la afectación de la póliza No. 900001035640, la misma no podrá efectuarse conforme a la tasación de perjuicios efectuada por el extremo actor en razón a que esta no se realizó conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos pertinentes. En ese sentido, es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”¹⁷

Se puede concluir entonces que el contrato de seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y, por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello por lo que aterrizando al caso en cuestión no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por otro lado, frente al seguro de responsabilidad el artículo 1127 del Código de Comercio establece:

¹⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 5065. Julio 22 de 1999.

“ARTÍCULO 1127. DEFINICIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD. *El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.*

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.”

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños, de responsabilidad y en general de cualquier seguro es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado o beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagar suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. Además de lo cual, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del asegurado y eventualmente enriqueciendo a la parte accionante.

En este sentido, se pone de presente al Despacho que, revisado el material probatorio obrante en el plenario, es posible advertir que la parte Demandante no acreditó la existencia ni la cuantificación de los perjuicios cuya indemnización se pretende. Así pues se evidencia: (i) Que la tasación de los perjuicios a título de daño moral y daño a la vida de relación es exorbitante con respecto a los baremos establecido por la Corte Suprema de Justicia, además que reclama el resarcimiento de daño a la salud pese a no ser reconocido por la jurisprudencia existente en materia civil, y, (ii) No es procedente reconocer suma alguna a título de lucro cesante pues, no se acreditó que la víctima directa laborara al momento del accidente de tránsito devengando un salario o ingreso continuo del cual destinara un porcentaje como una ayuda económica a favor de su cónyuge.

Lo anterior, sin mencionar que no se acreditó que el hecho generador del daño estuvo en cabeza del asegurado, que no existe nexo de causalidad entre la conducta desplegada por este y la trágica muerte del señor Jhon Dowglas Aristizábal, y que la única prueba aportada para probar la responsabilidad no es fidedigna a la forma en que ocurrieron los hechos pues el IPAT no es un documento que se diligencia por un testigo directo de los hechos y no tiene la virtualidad de endilgar responsabilidad civil en cabeza de alguno de los conductores involucrados. Lo que permite arribar que en el presente asunto no se encuentran acreditados los elementos del daño, por lo que una eventual condena implicaría la transgresión del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y con ello del principio de reparación integral del daño, según el cual, *“el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar*

*este límite*¹⁸.

En conclusión, en el estudio del presente caso no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo tiene un carácter meramente indemnizatorio. Debido a ello, no es dable condenar a la parte Demandada respecto al pago de ningún rubro pretendido, toda vez que la carga de la prueba de la totalidad de los elementos de la responsabilidad se encuentra en cabeza de los Demandantes y a lo sumo no es posible su acreditación, por cuanto en el expediente no obra ningún medio de prueba contundente en este sentido.

11. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA NO. 900001035640

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de Seguros Generales Suramericana S.A. en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme

¹⁸ Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad C 197 de 1993. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización¹⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza No. 900001035640 para el amparo de daños a terceros:

COBERTURAS DEL SEGURO		VALOR QUE DEBE PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Límite	\$ 0	\$ 3,040,000,000
	Deducible		
Daños al Carro	Pérdida Total	\$ 0	Valor comercial
	Pérdida Parcial	Si el arreglo cuesta menos de \$2,5 SMLMV (100%) deberá asumirlo, si es superior, todo lo paga SURA	Valor del daño
	Gastos de Transporte	\$ 0	\$ 80,000/DIA (PT)
Hurto al Carro	Pérdida Total	\$ 0	Valor comercial
	Pérdida Parcial	10% - 1 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	\$ 0	\$ 80,000/DIA (PT)
Accidentes	Accidentes al Conductor	\$ 0	\$ 50,000,000
	Accidentes a Ocupantes	\$ 0	\$ 35,000,000/OCUPANTE
Alternativas de Movilidad	Pérdida Parcial	\$ 0	20 días máximo
	Pérdida Total	\$ 0	20 días máximo
Asistencia	Asistencia	\$ 0	Asistencia Global
Llaves	Pérdida de llaves	\$ 0	Si

Documento de: Póliza Nueva



INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de la póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió con usted, las encuentra en el clausulado.

De esta forma, es claro que la suma que delimita la responsabilidad de mi representada frente a la hipotética declaratoria de responsabilidad civil del asegurado y el surgimiento de la obligación condicional contenida en el contrato de seguro, es el valor de \$3.040.000.000, el cual representa la suma asegurada, ello sin perjuicio de que la obligación indemnizatoria pueda ser menor conforme a lo que el juzgado considerare demostrado en el proceso.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que,

¹⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001.

sin perjuicio que en el caso bajo análisis Seguros Generales Suramericana S.A. no puede ser condenada. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

12. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y EL SEÑOR JOSÉ MIGUEL DAVID PUENTES

Se formula esta excepción en razón a que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa LYU-881 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia²⁰, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte²¹ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

²⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

²¹ *Ibidem*.

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).*

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la póliza de seguro aquí vinculada, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 5 de junio de 2024, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite como quiera que su relación con el vehículo de placa LYU-881 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

13. IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR A SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. A PAGAR INTERESES MORATORIOS DESDE LA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL, LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA O LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO

Es claro que para que nazca a la vida la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora cuando la parte demandante no ha demostrado fehacientemente la ocurrencia

del siniestro y tampoco la cuantía de la pérdida. Por lo anterior mientras se encuentren insatisfechos los dos presupuestos anteriores no es posible afirmar que haya nacido obligación alguna y mucho menos que se encuentre insatisfecha.

Debe decirse que en este caso se encuentra en una enorme zona de penumbra los hechos que rodearon la producción del accidente y además que el mismo haya tenido la entidad de causar los perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial que señala la parte actora. Es decir se encuentra insatisfecho el cumplimiento de la acreditación del siniestro y la cuantía de la pérdida y que siendo estos dos elementos esenciales en los términos del artículo 1077 del C.Co para acreditar el derecho a recibir una indemnización por parte del asegurador debe afirmarse enfáticamente que mientras no se pruebe tales presupuestos no es posible considerar que ha nacido a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de Seguros Generales Suramericana S.A. Por lo dicho, salta a la vista que el interesado no ha acreditado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, por ende no podría tampoco predicarse la mora de una obligación que no ha surgido como consecuencia de la misma omisión en la acreditación de las cargas del artículo 1077 del C.Co que se encuentra en cabeza de los demandantes.

Ahora bien, debe dejarse claro que en el hipotético y remoto evento en que el Honorable Despacho considere que la indemnización es procedente y que existe obligación por parte de Seguros Generales Suramericana S.A., se deberá tener en consideración que la certeza sobre dicho derecho sólo quedará probado al momento de proferirse sentencia, por lo que si el Despacho encontrara sustento de tal pretensión es claro que ello implicaría que los presupuestos del artículo 1077 se demostraron en el curso del proceso, después de surtirse el debate probatorio y por ende no podría condenarse al pago de intereses moratorios desde el momento en que se presentó la demanda o se notificó su auto admisorio.

Como sustento de lo anterior, se encuentra que la Corte Suprema de Justicia en cuanto al momento en el que se empiezan a causar los intereses moratorios, ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente:

(...) Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo (...)²²

²² Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo

Aunado al anterior pronunciamiento, es relevante resaltar cómo la Corte Suprema ha dicho que la sanción a la que corresponde los intereses de mora no puede ser aplicada de manera objetiva, sino que debe atenderse al caso concreto a fin de evaluar el motivo de retardo en el pago, lo anterior en palabras de la Corte al indicar que:

“(…) De igual modo, en providencia del 29 de abril de 2005, reiteró: “ a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños (…)”

Los fragmentos jurisprudenciales que acaban de citarse explican que la aseguradora sólo incurre en mora cuando no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de las carga probatorios sobre la existencia del siniestro y el valor del daño.

Pero esta sanción-ha afirmado esta Corte-no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo de retraso en la liquidación.

En ese orden- prosiguió esta corporación- si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su culpa, tal como ha sido explicado por esta sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria (…)”²³. (Sentencia de 27 de agosto de 2008.Exp- 1997-14171-01

Lo anterior, deja claro que como a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir

de 2021.

²³ Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5681 de 2018, MP. Ariel Salazar Ramírez

los presuntos daños producto del accidente del 5 de junio de 2024 y tampoco la cuantía de la pérdida reclamada, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la notificación del auto admisorio de la demanda, o desde que presentó la misma. Luego, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación presuntamente pendiente de indemnizar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

14. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

15. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso, ya sea frente a la demanda o ante el llamamiento en garantía, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código del Comercio.

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDA

A. INTERVENCIÓN EN PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de controvertir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al H Juez, proceder de conformidad.

B. FRENTE AL REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Considera esta parte que es necesario que la demandante aporte el registro civil de matrimonio actualizado con el fin de verificar si la señora Claudia Ávila Sanjuan efectivamente era cónyuge de la víctima para el momento del accidente. Esto por cuanto el registro aportado al proceso data del mes de enero de 1999, es decir, 25 años antes del accidente, desconociendo si su calidad de cónyuge existía para el momento en el que ocurrió el accidente de tránsito.

C. FRENTE A LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN JUDICIAL

Conforme al inciso segundo del artículo 236 del CGP: “**PROCEDENCIA DE LA INSPECCIÓN.** (...) *Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier medio de prueba.*”. Por lo tanto, es claro que la prueba de inspección judicial es de carácter subsidiario y solo procede cuando se pretende corroborar hechos cuya verificación no es posible realizar de otra manera, sin embargo, en el presente caso se observa que la parte demandante refiere la solicitud del decreto de dictamen pericial de reconstrucción de accidente de tránsito, e igualmente, solicitó la comparecencia de diferentes testigos con el fin de corroborar las circunstancias que rodearon los hechos, luego, cuenta con medios probatorios mediante los cuales se puede corroborar las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito, tornando en improcedente la petición de inspección judicial ya que claramente no cumple su carácter de subsidiaria.

Por lo anterior solicito al Despacho no acceder a esta petición probatoria.

D. FRENTE AL DICTAMEN PERICIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Conforme a lo establecido en el artículo 228 del CGP: “**CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL.** *La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones (...)*”, de tal forma que, en consideración a que la parte demandante anunció que aportará al proceso un dictamen pericial de reconstrucción de accidente de tránsito en el término que el juzgado conceda para el efecto, solicito que una vez aportada dicha prueba se ordene la comparecencia a audiencia del perito que la elabore con el fin de ejercer la contradicción del mismo.

E. FRENTE A LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

La parte demandante solicita al juzgado tener en cuenta la disposición del artículo 167 del CGP según la cual a petición de parte o de manera oficiosa se puede distribuir la carga probatoria

respecto de los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que las partes persiguen.

No obstante lo anterior, para el caso que ocupa nuestra atención, dicha posibilidad solo se abre paso en tanto se cumpla alguno de los supuestos relacionados en el mencionado artículo e incluso citado en dicho acápite por la misma parte demandante, sin embargo, es evidente que la parte demandante no cumple ninguno de los supuestos y no explica con suficiencia la necesidad de distribuir la carga probatoria pues se limita a afirmar que *“Al momento del accidente, los demandantes se encontraban en un estado de incapacidad, para recolectar los medios que conduzcan a la verdad de cómo sucedió el accidente, por lo anterior le solicito al despacho que la carga de la prueba de la culpa y de la causa eficiente del daño se traslade al demandado”*. En este sentido, es claro que la parte demandante relaciona una de las causales para proceder con dicha distribución sin explicar ni comprobar cómo dicha causal aplica en el caso concreto, pues una parte no se encuentra en estado de indefensión por el simple hecho de afirmar que se encuentra en tal estado.

Por lo anterior, me opongo a esta solicitud pues es evidente que con ella la parte accionante busca evitar de forma injustificada cumplir con la carga probatoria que el mismo artículo 167 del CGP le impone.

VI. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

A. DOCUMENTALES

-Copia de la Póliza de Seguro Plan Autos Global No. 900001035640.

-Condicionado No. 21/06/2023-1318-P-03-F-13-18-0040-245-D001 aplicable a la póliza de Seguro Plan Autos Global No. 900001035640.

B. TESTIMONIALES

-Respetuosamente me permito solicitar decretar el testimonio de la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.061.751.492 de Popayán, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán, y puede ser citada en la Carrera 2 Bis No. 4-16, o en la dirección electrónica darlingmarcela1@gmail.com cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre las características la Póliza vinculada al proceso, sobre la ausencia de cobertura material y

exclusiones, y sobre los hechos objetos de litigio; los límites a los valores asegurados, el deducible, la cobertura temporal de la póliza y sobre los demás aspectos relevantes sobre el particular.

C. INTERROGATORIO DE PARTE

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su Despacho a las demandantes Alejandra Catalina Aristizabal Avila y Claudia Rocio Avila Sanjuan, en su calidad de hija y cónyuge de la víctima respectivamente, para que en audiencia pública absuelvan el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito, le formularé sobre los hechos de la demanda.

En calidad de demandados solicito comedidamente ordenar y hacer comparecer al Despacho a José Manuel David Puentes en su calidad de propietario del vehículo asegurado, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito, le formularé sobre los hechos de la demanda.

D. DECLARACIÓN DE PARTE

En virtud de lo establecido en el artículo 165 y 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete la declaración de parte del Representante Legal de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, y las excepciones formuladas. El representante legal podrá ser citado en la Carrera 63 49 A 31 Piso 1 Ed. Camacol, en la ciudad de Medellín. Dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@suramericana.com.co.

VII. FRENTE A LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Resulta a todas luces improcedente la solicitud de medidas cautelares realizada por la parte demandante pues no se cumple ninguno de los criterios establecidos en el artículo 590 del CGP para su decreto.

En efecto, la parte demandante solicita que se decrete la inscripción de la demanda en el certificado de la SUCURSAL SURA POBLADO MEDELLIN identificado con numero de matrícula No 21-142992-02 perteneciente a mi representada. Sin embargo, para que el decreto de las medidas cautelares proceda, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos previsto en la normal procesal antes referida:

Fomus boni iuris: No es cierto, contrario lo afirmado por la contraparte, que el IPAT del accidente

de tránsito establezca una presunción de culpa en contra del conductor del vehículo asegurado, ya que dicho informe no posee la virtualidad de endilgar responsabilidad alguna respecto de las personas involucradas en un accidente de tránsito, luego, no existe ninguna prueba que permita deducir la responsabilidad civil del demandado y justifique la práctica de la medida.

Periculum in mora: No existe ningún peligro respecto del derecho reclamado o su efectiva protección ante la decisión de no adoptar la medida cautelar solicitada, toda vez que mi representada es una entidad aseguradora sometida a control de la Superintendencia Financiera cuyo objeto social tiene que ver con la celebración de contratos de seguro, lo que consecuentemente conlleva el pago de los valores asegurados en dichos acuerdos en caso de corroborar la ocurrencia del riesgo asegurado, luego, en caso de una hipotética condena, no existe riesgo de que mi prohijada evada la responsabilidad que en cabeza de ella se encuentra, sino que solo en ese momento surgirá la obligación condicional para ella la cual será atendida dando cumplimiento a su objeto social en los términos contenidos en el contrato de seguro.

Respecto de la caución para el decreto de las medidas solicitadas: conforme al numeral 2 del artículo 590 del CGP, el decreto de la medida cautelar solo procederá luego de que la parte demandante preste caución por el 20% de las pretensiones estimadas en la demanda, situación que no se verifica en el presente caso haciendo improcedente su decreto, a tal punto que incluso el auto admisorio de la demanda condicionó el decreto de las medidas solicitadas a la verificación de dicha caución, la cual no se ha prestado por la parte demandante.

Por lo anterior, me opongo a la solicitud de decreto de medidas cautelares pidiendo además que, en caso de que la parte demandante no cumpla con la carga que le corresponde para su decreto, se termine el proceso y la demanda sea devuelta a las accionantes, pues es claro que la presente solicitud refleja un uso inadecuado de lo preceptuado en el parágrafo primero del artículo 590 del CGP en cuanto permite a la parte interesada acudir ante un juez sin agotar el requisito de procedibilidad por el simple hecho de solicitar medidas cautelares. Sin embargo, ello no quiere decir que tal prerrogativa implique realizar una solicitud de cautelas irresponsable y sin prestar la caución requerida con el único objetivo de omitir agotar el requisito de procedibilidad que evidentemente brilla por su ausencia en el presente caso.

VIII. ANEXOS

1. Poder otorgado al suscrito por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. para representar a la compañía aseguradora en el presente trámite.
2. Certificado de existencia y representación legal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Medellín.

3. Certificado de existencia y representación legal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. expedido por la Superintendencia Financiera.
4. Las demás relacionadas en el acápite de pruebas.

IX. NOTIFICACIONES

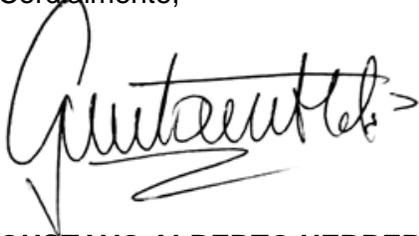
La parte demandante, en el lugar indicado en el escrito demandatorio.

El señor José Miguel David Puentes, en la dirección que se indica en el escrito de la demanda.

Mi representada, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en la Carrera 63 49 A 31 Piso 1 Ed. Camacol, en la ciudad de Medellín. Dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@suramericana.com.co.

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaria de su despacho o en la Avenida 6ª Bis No.35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.